

“Réquiem por el campo andaluz”, de Daniel Pérez, se hace con el I Premio Andaluz de Periodismo Social Antonio Ortega



Moisés, que espera una pensión de invalidez, y su esposa Soledad.

La calle Guadalete, en Puerto Serrano, era en 1976 una travesía larga, sin asfaltar, que cruzaba dos hileras de casas con fachadas de obra viva y algunas chabolas de paredes de latón, porches de alambre mohoso y techos de Uralita. La imagen del barrio, casi un arrabal que bajaba hasta el río, ha quedado congelada para siempre en una sucesión de fotografías a cual más representativa: corrales miserables, chozas improvisadas que no tenían ni luz ni agua, bestias sueltas, niños descalzos. **Ese año Diamantino García Acosta, conocido como el cura obrero, visitó a las familias más desfavorecidas del pueblo** y condenó en una asamblea pública la “mala fe de los jerarcas” que por acción u omisión estaban “entonando un réquiem por los pueblos del campo andaluz”. Habló de subdesarrollo y de tercermundismo y dijo que los jornaleros no querían limosnas, sino tierras fértiles en las que trabajar.

Han pasado casi cuatro décadas de aquello y en la calle Guadalete, hoy en día, no hay socavones ni basura. Por lo demás, sigue concentrando **uno de los núcleos de población más pobres de Europa, con una renta familiar media similar a la de Rumanía.**

Se acerca la Nochebuena y a las puertas de la casa de Dolores Ruiz y Antonio Barrera (420 euros de ingresos totales), un corro de niños juega a botar barquitos en los charcos. Los hacen con recortes precarios de latas de Cruzcampo. Los barquitos aguantan diez segundos y después se hunden, pero los críos observan las burbujas del naufragio sin hacer ni siquiera el ademán de rescatarlos. Dentro, la única luz procede del patio o se cuela por las ventanas. Es posible que no haya corriente. En el aparador de la salita, entre vírgenes de escayola y figurines de cerámica, hay **una Biblia abierta por la mitad y una caja de zapatos llena a rebosar de facturas y papeles del banco.** Del techo de la cocina cuelga un cable sin casquillo ni bombilla.

Dolores y Antonio tienen que apañárselas para llenar a diario el estómago de nueve personas. “Nueve desayunos, nueve almuerzos, nueve cenas”, repite Dolores como una letanía. El sello agrícola. Las medicinas que ya no cubre el seguro. La casa, con la planta en bruto y parcheada de humedades, está en proceso ejecutorio porque no pueden pagar la hipoteca. Antonio admite que la subasta quedó desierta porque no la quería nadie.

La pregunta es sencilla: ¿Qué ha pasado en el campo andaluz para que la situación de pobreza estructural de la que hablaba Diamantino hace cuarenta años siga siendo una constante que, además, se agrava a medida que avanza la crisis? La respuesta, sin embargo, es muy compleja.

EL MODO DE VIDA TEMPORERO



Antonio Nieto, jornalero que tuvo que emigrar a Alemania en los años 60.

En la Sierra de Cádiz, las distintas generaciones han venido adscribiéndose desde siempre y por defecto al mismo modo de vida casi nómada: había que fijar un punto de partida (Puerto Serrano, Bornos, Espera...) y luego **la casa a cuestras, con los enseres apilados en furgonetas de alquiler, rumbo a cortijos** en los que hasta no hace mucho sobrevivía la costumbre de la cuchara y el paso atrás. Este periplo circular incluía (incluye) la fresa en Huelva, la aceituna en Jaén y luego lo que surja (nectarinas, espárragos, vendimia), una rueda de campañas que contribuía profundamente al desarraigo y derivaba en otros problemas como el absentismo escolar. Entre una campaña y otra, sólo tras la muerte de Franco y la llegada de la democracia, a las familias “en dique seco” no les quedaba otro remedio que recurrir al llamado Empleo Comunitario (primero) o al PER (después).

Antonio Nieto (de 70 años, que se vio obligado a emigrar a Alemania durante más de 30), guarda un recuerdo preciso de la época inmediatamente anterior a la entrada en vigor del subsidio, cuando **“los jornaleros esperaban en la plaza del pueblo a que apareciera el señorito o el capataz** de la finca, señalaba con el dedo a los que necesitaba y luego negociaba con ellos el precio del jornal”. Antonio dice que los inspeccionaban como al ganado y que los más inconformistas “acababan pasando hambre”. **“El PER sirvió para que ganáramos autonomía**, porque ya no dependíamos tanto del pie con el que se levantaba el señorito, no había que reírle las gracias todos los días”.

Antonio se refiere al primer modelo de subsidio agrario impuesto por el PSOE en 1983. Juan Jesús González, uno de los sociólogos españoles pioneros en el estudio del desempleo rural en Andalucía y Extremadura, hablaba en uno de sus informes de la doble cara del sistema: “La principal crítica al nuevo modelo se fundamenta, por un lado, en la subordinación en que coloca al trabajador frente a la patronal y, por otro, en las **posibilidades de corrupción que encierra ya que, por lo pronto, se ha establecido un sistema de compraventa de jornadas”**.

Una parte del movimiento sindical rechazó de entrada el modelo de subsidio socialista, puesto que consideraba que suponía, de facto, “la jubilación anticipada” de las nuevas generaciones que pugnaban por introducirse en el mercado de trabajo, además de que parecía abocar a los jornaleros a una especie de intervención pública que podría alimentar actitudes clientelistas, neutralizando su capacidad de respuesta y su voluntad de acción. Podría tratarse, en definitiva, de una herramienta de control social.

Pedro Barrera, coordinador comarcal del SAT en la Sierra de Cádiz, habla como veterano de la lucha jornalera. A los 16 años, todavía en el tardofranquismo, participó en su primera ocupación de tierras.

*“Parece mentira que lo que estamos pidiendo ahora se parezca tanto a lo que pedíamos entonces”. A las siete de la mañana, en la Plaza Andalucía de Puerto Serrano, hay un trasiego menor de coches camino del tajo. Hace relente y huele a café. Un lunes como éste, hace una década, a la misma hora, la Plaza era un bullicio de peones y albañiles repartiéndose los turnos para conducir hasta la Costa. **El paro en el pueblo bajó del 5%. “Es la prueba de que cuando hay trabajo, se trabaja”**, afirma Pedro Barrera. “¿Y lo que dijo Duran i Lleida?” Arquea las cejas y aprieta los labios. “¿Te acuerdas?” Duran i Lleida dijo: “Con nuestro trabajo cobran el PER y se pasan el día en el bar de su pueblo”. “Ese tío no tiene ni (...) idea. Ni (...) idea. Te voy a contar un par de verdades del PER. A principios de los 80, el Gobierno definió unas Zonas de Reindustrialización. Incluyó País Vasco, Asturias, Galicia, Valencia y, por supuesto, Cataluña. **Se jubiló en masa a los trabajadores de la metalurgia y de la minería con pensiones que superaban los salarios de partida**, aunque tuvieran 30 tacos. Se gastaron miles y miles de millones de pesetas. Nadie los llamó vagos, que yo recuerde. Como ese mismo Gobierno tenía mala conciencia con Extremadura y Andalucía, nos dio una reconversión agraria, igual que la industrial, pero a la baja. Un subsidio miserable, inferior al salario mínimo, que cobraríamos solo mientras, poco a poco, ellos complicaban las condiciones y echaban a la gente del sistema agrario. **La idea era cargarse el PER**. Pero luego, porque no los hemos dejado y porque hay un interés electoral, no han sido capaces”.*

Pedro Barrera se sabe el discurso al dedillo. Sigue:

“La pregunta es: ¿Qué son los 400 millones de euros anuales que le cuesta al Gobierno el PER y que dan de comer a mucha gente, comparado con los 40.000 millones a fondo perdido que inyectamos solo el año pasado a los bancos?”. “¿Demagogia? Demagogia lo de Duran i Lleida”.

Ya en la era Aznar, la solución que propuso el Gobierno para “eliminar” el PER progresivamente fue la transformación del sistema en una especie de circuito de dirección única al que no puede incorporarse ningún trabajador más y en el que los que ya están tienen los días contados. El decreto de mayo de 2002 “garantiza” los derechos de los eventuales que cobran el subsidio, pero limita el acceso a este tipo de protección a quienes lo solicitan por primera vez. Los nuevos jornaleros del campo tienen que cotizar directamente en el sistema ordinario de la Seguridad Social.

En el fondo, **el decreto regula la eliminación del PER a través de “una vía lenta”**, con la única concesión a los sindicatos (después de diez meses de lucha activa) de una renta agraria tan miserable que, hoy en día, no da cobertura ni al 4% de los jornaleros andaluces.

LOS EFECTOS DEL CRACK



Francisco y Rosa María han entregado su vivienda en dación en pago.

Después, llegó el *boom* de la construcción. Muchos jornaleros abandonaron el Régimen Especial Agrario y se emplearon como peones en la Costa del Sol. Tras el batacazo, de regreso a la bracería, se encontraron con un campo menos productivo, atado en buena parte a los cultivos de subsistencia y fuertemente mecanizado. Así que la anécdota que contaba Antonio Nieto encuentra hoy sus propias equivalencias. Por ejemplo: Durante la última campaña del verdeo, **los sindicatos denunciaron que algunos empresarios estaban imponiendo una vuelta a la esclavitud**, aprovechándose descaradamente la situación de necesidad de los jornaleros. La Fiscalía de Sevilla decidió actuar de oficio, aunque es improbable que el asunto pase a mayores. Los trabajadores tienen miedo a que no se les guarde sitio en el cupo de las próximas campañas y, como mucho, hablan de forma anónima, en la calle, en los bares, por lo bajo. **No sólo hay menos mano de obra, sino también peores sueldos y condiciones que rozan (cuando no sobrepasan) la ilegalidad.**

Paqui Romero, responsable de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de la UGT en la Cádiz, resume la situación actual de una forma muy ilustrativa: “Antes nos faltaba mano de obra, y ahora se ven colas en las puertas de los cortijos”. Un dato contundente: más de 20.000 gaditanos, según el sindicato, solicitaron plaza para trabajar en la última campaña de la vendimia francesa, y otros miles se han inscrito en el registro del GEA, de la Consejería de Empleo, para ver si se ‘cuelan’ en alguna campaña próxima.

Además, como apunta Luis Páez, de Agroalimentaria de CC OO, “aunque hasta el arranque de la crisis estábamos aguantando el tirón mejor que otros, eso no significa que tengamos capacidad para absorber mano de obra, y menos ahora, con la pérdida de jornales que derivadas de las malas campañas”. Y advierte: **“A muchos les va a resultar imposible sumar las 35 peonadas”**. Es decir, los albañiles siguen demandando volver al campo, “pero otra cosa es que puedan hacerlo”.

Una mañana cualquiera, en la placita del consultorio, Antonio Rodríguez y Lugardo Doblado comparten tabaco y tertulia con los jubilados de Espera. Hay un monolito, a la entrada del pueblo, con **una leyenda pintada en la cerámica: “De aquí procede el dicho ‘Esto va a acabar como el rosario de la aurora’”**. “En tragedia, sí”, admite Pedro Romero, el alcalde. “Ya quedan pocos albañiles cobrando el paro de cuando había construcción, pero después, ¿qué?”. Antonio y Lugardo militan en el colectivo mayoritario de desempleados de la Sierra: han cambiado el palustre por la azada. “Pero ya no hay ni campo”, dice Antonio, de 44 años, que estuvo nueve trabajando en la construcción: “Madrid, Canarias y la Costa del Sol, hasta que todo se fue a tomar viento”. “Hemos preguntado en Zaragoza y en Murcia, pero por allí tampoco: nada de nada”.

El último informe al respecto de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) advierte de la “disparidad en términos de empleo” que la crisis económica está imponiendo entre la población del campo y la de la ciudad. El Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT señala que **el paro en las zonas rurales pasó de menos del 10% en 2007 a más del 35% en 2013**. El desequilibrio campo / ciudad también tiene su correspondencia Sur / Norte. Las regiones de Navarra y Cantabria, por ejemplo, no han superado el techo del 17% de paro. El campo andaluz, se mire desde el indicador que se mire, es el hermano pobre de todos los campos de España.

CONDICIONES DE SEMIESCLAVITUD



Dolores y Antonio, 420 euros de ingresos mensuales.

El Sindicato de Obreros del Campo (SOC-SAT) habla a las claras de un regreso progresivo a las formas y modos de la postguerra, Cáritas alerta en su último informe de un “grave deterioro de las condiciones laborales” en el sector agrícola, UGT ha llevado el asunto a la Fiscalía y hasta la Oficina Estadística de la Unión Europea cree que España es “**el segundo país de la UE con más víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral**”. Como explica el sociólogo sevillano Luis de Molina, “no se trata ni mucho menos de una realidad invisible, simplemente hay una parte de la sociedad que no quiere verla”.

En la última campaña de la aceituna se han detectado ‘convenios’ impuestos unilateralmente por la patronal como el que sigue: Tres euros y medio por cada canasta de aceituna, en una jornada de diez horas, implica un tope de 25 canastas por pareja. Es decir: a **37 euros el jornal como máximo, la mitad de lo que se pagaba hace cinco años y casi lo mismo que hace quince**. No hay fines de semana ni días de descanso, salvo que llueva. “Y si aparece alguien de la Inspección de Trabajo o del Sindicato, directamente les dicen a los trabajadores que no vuelvan”, explica Pedro Barrera, del SOC-SAT, que incluso confirma que existen **casos peores: hasta 20 euros por día de trabajo**, pero con el capataz contabilizando lo que recoge cada trabajador y presionando a las personas más lentas” en un juego perverso y psicológicamente demoleedor. O sea: “El que se queda atrás, lo mismo no vuelve”.

LA ENCERRONA DEL PER



Antonio y Yolanda han perdido su casa por no poder pagar la hipoteca.

Es difícil encontrar un informe serio sobre la situación del mundo rural andaluz que no concluya que el subsidio agrario ha servido para proporcionar a las familias jornaleras un tímido acceso al consumo, la última frontera entre la pobreza extrema (que existe) y la exclusión social definitiva, pero que a la vez no subraye el **peligro de que los jornaleros acaben conformando una especie de “gueto”**, regido por sus propias normas antropológicas y sociales y aislado del mercado del trabajo.

Quizá uno de los análisis más contundentes al respecto es el que propone el investigador Simón Pedro Izcara, que después de entrevistar a jornaleros de Loja, Jódar, Baena y El Ejido y tras estudiar la evolución de las reivindicaciones en el campo desde los años 70 hasta la actualidad, concluye: **“Los intereses colectivos están siendo desplazados por intereses de carácter más individualista.** Su identidad laboral y social, su conciencia de clase, que estaba impregnada de firmes valores de solidaridad, poco a poco se ha ido resquebrajando y ahora aparece inundada por sentimientos de impotencia, inferioridad y dependencia”.

Lo saben bien Antonio Velázquez y Yolanda Reyes, ambos de 30 años y naturales de Puerto Serrano. Tienen una niña. En medio de una discusión sobre el volumen del fraude del PER, él pregunta en voz alta: “¿Tú sabes cuánto te queda de subsidio cuando le quitas el sello?” Son 400 euros. Ella asiente con la cabeza. Él continúa: **“¿Tú te crees que si alguien pudiera trabajar y meter un sueldo a su casa iba a preferir pasar penurias por 400 euros? ¿Tú te lo crees, eh?”** Ella niega con la cabeza. “¿Adónde va nadie hoy con 400 euros?” Ella afirma: “A ninguna parte”.

Antonio y Yolanda acaban de llegar a un acuerdo con el banco para entregar su casa y liquidar su hipoteca. Optaron por la dación de pago. Viven de alquiler. A él le quedan tres meses de subsidio. “Antes, cuando uno empalmaba las campañas, nos íbamos a la fresa en Palos y a Moguer. Ahora no hay sitio. Ni aquí ni allí. Y si te pasas a la rama general, pierdes lo que lleves cotizado en el campo. No te vale, como antes. Lo malo es que en la rama general tampoco hay trabajo para completar un paro. **No puedes vivir dentro del PER, pero tampoco puedes salirte. Una ratonera**”, dice José. Yolanda asiente por sistema.

En esa encerrona de la que hablaba José (“No podemos estar dentro del PER, pero tampoco fuera”), también se encuentran Francisco Campos y Rosa María Morato (adeudan tres letras de hipoteca, tienen cuatro hijos); O Moisés Ruiz y Soledad Campos, que llevan más de dos años sin una campaña continua, salvo algunos días de verdeo y otros de vendimia. “Este año no hay fresa. **Los trabajadores portugueses han llegado a Huelva por la mitad de sueldo, porque allí la cosa, por lo visto, también está fatal**”. Moisés está esperando una media pensión de invalidez y confía en completar un sueldo digno vendiendo cupones.

O Antonio Rivera y Encarna Román, que explican que hace años que no hay una buena campaña de aceituna, que hace dos temporadas tocó sequía, la pasada diluvio, y esta directamente ha terminado con un 40% menos de jornales y los precios del producto por los suelos. “No hay quien levante cabeza”, dice Antonio, que se encerró en el Ayuntamiento de Puerto Serrano hace días para exigir una actuación de emergencia por parte de las administraciones.

“No sé si pueden considerárseles víctimas”, dice Daniel Holgado, experto en Psicología Social de la Universidad de Sevilla, “pero desde luego no son culpables”. “En la mayoría de los casos hay un sistema de vida heredado, la imposibilidad de acceder a una educación superior por culpa de la misma movilidad temporera o por un seguidismo del colectivo. Es decir: los chavales hacen lo que hacen otros chavales, cuesta romper la dinámica. Ocurre en el campo y en las ciudades, y es peor en las áreas deprimidas. Claro que hay una responsabilidad individual. Y otra colectiva. Pero **habría que preguntarse si, más allá de tópicos, alguna vez han tenido alguna salida.** Incluso si a las élites les conviene que la tengan. Todo sistema necesita sus parias. Es lo que hace que los menos pobres se sientan afortunados. En realidad, son ellos los que evitan las revueltas, el espejo en el que nadie quiere mirarse”. El ridículo consuelo de la desdichada clase media.